

Este documento está publicado en:

Martínez Neira, Manuel. Del Estado monoclase al constitucional. A propósito de una giornata. En: *Le arterie e il sangue della Democrazia. Teoria, pratica e linguaggio costituzionale fra Italia e Spagna (1931-1948-1978)*, Livio Antonielli/Giacomo Demarchi (a cura di), Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2019, pp. 111-120.

V. *Del estado monoclase al constitucional.*

*A propósito de una “giornata”**

Manuel MARTÍNEZ NEIRA – Universidad Carlos III, Madrid

En el verano de 2014 apareció una nueva edición, la tercera, de los ya clásicos *Appunti di storia delle costituzioni moderne* debidos al magisterio del Prof. Fioravanti¹. Esta nueva edición se hacía eco de un cambio en el proyecto editorial. Si en un principio estaba previsto un volumen independiente para las constituciones del pasado siglo XX, ahora el autor informa en el prólogo sobre un inédito cuarto capítulo en sustitución de ese volumen. En ese nuevo capítulo (4. Las transformaciones constitucionales del siglo XX) son protagonistas junto a la Constitución republicana italiana de 1848, las españolas de 1931 y 1978, precisamente los textos que nos convocan en esta magnífica sede de la Università degli Studi di Milano, antiguo Ospedale Ca' Granda.

En esas páginas, Fioravanti consigue caracterizar – con su habitual maestría – el tipo histórico de constitución del siglo XX: la constitución democrática. Un tipo que reclama la supremacía de la constitución², concebida como límite y directriz al mismo tiempo; una doctrina del constitucionalismo que – por ello – ya no puede ser solo doctrina *del gobierno limitado*, y debe ser también

* Se reproduce aquí – con ligerísimos cambios – el texto leído el 3 de noviembre de 2017 en la Universidad de Milán. Agradezco al Prof. Antonielli y al amigo Giacomo Demarchi su gentileza.

¹ Citaré por la versión española, que en este caso es la séptima edición: Maurizio Fioravanti, *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*, 7.ª ed., Madrid, Trotta, 2016.

² En el precedente tipo histórico, era la ley – y no la constitución – quien ostentaba esa supremacía. Una ley que dependía solo de la voluntad del legislador, lo que llevó a Paolo Grossi a acuñar la locución absolutismo jurídico. Véase, Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1998.

Sobre el particular ilustran unas palabras de Cirilo Álvarez Martínez (Id., *Instituciones de derecho civil*, Valladolid 1840): “Para serlo [la ley] no necesita ser justa, útil, ni reunir las otras cualidades que suponen de esencia algunos tratadistas de nuestro derecho. Si emana del que tiene el poder, y si se promulga solemnemente, será siempre una ley, aunque no reúna otras virtudes”.

Sobre este libro ha llamado la atención recientemente Carlos Petit, véase: Id., “Altamira en Chicago”, en Rafael Altamira, *Spain. Sources and Development of Law*, estudio preliminar y edición de Carlos Petit, Madrid, Dykinson, 2018, p. XXXIV. Cirilo Álvarez (1807-1878) redactó esta obra pensando en la docencia de la jurisprudencia en la segunda enseñanza. Recuérdesse que el autor llegó a ser ministro de Justicia y presidente del Tribunal Supremo.

doctrina *de las tareas del gobierno*; un modelo que – de esta manera – se enfrenta al principio de soberanía del Estado tal y como se había conocido desde Hobbes³. Esto es así porque a este tipo constitucional corresponde una nueva forma de Estado, la del Estado constitucional que se difundió por Europa al concluir la segunda guerra mundial. En efecto, tras los totalitarismos y las políticas de exterminio que se desarrollaron en el periodo de entreguerras – durante la denominada crisis del sistema liberal – resultaba evidente que ya no bastaba la simple garantía legislativa de los derechos, ahora se estimaban necesarias las garantías de la constitución – es decir, la rigidez y el control de constitucionalidad – para proclamar la inviolabilidad de los derechos. Apareció así una nueva forma de Estado, que situó a la constitución – y no a la ley – en su centro⁴, en el que la soberanía ya no era monista (son constituciones privadas de un poder supremo), lo que permitió concebir la universalización de los derechos, ligados ahora a la dignidad humana reconocida en la constitución como realidad preconstituyente. Por ello, junto con la inviolabilidad de los derechos, en el Estado constitucional apareció el principio de igualdad, es decir, la dignidad de la persona que reclama unos derechos sociales; y el democrático, la exigencia de que la constitución refleje la sociedad real, con su carga de contradicciones y conflictos, con su pluralismo – ya no la sociedad de individuos libres e iguales en abstracto –.

La novedad que supuso la constitución democrática y el Estado constitucional, es algo que de alguna manera adelantó Massimo Severo Giannini, con su reflexión en torno a la fórmula estado monoclasa por él acuñada. Precisamente coincidiendo con la celebración de esta *Giornata* ha visto la luz un inédito del maestro romano. Se trata de una lección, dictada el 11 de enero de 1954, en la que abordó la denominada crisis del Estado, de la que se hablaba en esos años de posguerra⁵. En su lúcido análisis, consideraba que la percepción de una crisis estatal se sustentaba en un análisis erróneo, realizado sin un instrumental adecuado: se

³ Véase, M. Fioravanti, *Constitutionalismo. Experiencias históricas y tendencias actuales*, Madrid, Trotta, 2014, p. 137 ss.

⁴ Este paso fue denominado descodificación por Natalino Irti. Véase, Id., *La edad de la descodificación*, Barcelona, Bosch, 1992.

⁵ B. Settis, *Le ‘considerazioni sullo Stato moderno’ di Massimo Severo Giannini*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 3, 2017, pp. 677-709. En ese artículo, como apéndice se transcriben las 13 páginas mecanografiadas de la lección dictada en el Centro di preparazione politico-amministrativa: Massimo Severo Giannini, “Considerazioni sullo Stato moderno”, pp. 693-709. La lección incluía el siguiente sumario: 1. Una crisi dello Stato? – 2. Idealismo e realismo. – 3. Realtà dello Stato liberale. – 4. Classi sociali e potere politico. – 5. Principi costituzionali e legislazione amministrativa. – 6. L’estensione del suffragio e della rappresentanza nell’800. – 7. Lo Stato immaginato. – 8. Le Costituzioni pattizie. – 9. La Costituzione italiana del 1948.

Sobre Giannini y su obra, véase: G. Ferasin, *Massimo Severo Giannini. Il diritto amministrativo nel divenire dell’ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, incluye una nota biobibliográfica (pp. 151-152).

utilizaban atemporalmente (como si se tratasen de realidades lógicas) conceptos que por su esencia son históricos, y así era imposible percatarse de que, desde su aparición en los años de la revolución francesa, el Estado había evolucionado y que por lo tanto no podíamos hablar del Estado sin más, sino que debíamos hacerlo de un tipo de Estado determinado históricamente⁶.

En efecto, en la posguerra (es decir, a partir de 1945) se abordó la denominada crisis del Estado partiendo de una visión mitificada del Estado liberal – el que dominó la mayor parte del siglo XIX –, que era descrito idealmente como un Estado en el cual las libertades civiles de los ciudadanos estaban tuteladas, regía el principio de la separación de poderes, el papel del parlamento era eficiente, el poder ejecutivo nunca habría pensado en hacer decretos leyes u otros actos propios del legislativo, etc. Pero al enfrentar esa descripción con la realidad, Giannini concluía que en la experiencia histórica ese Estado nunca había existido⁷. Preliminarmente, por lo tanto, trataba de acometer dos tareas en esa lección: determinar cómo había sido en realidad el Estado liberal, y si ese Estado era estructural y sustancialmente idéntico – o al menos similar – al de la posguerra⁸.

Este empeño por caracterizar la realidad del Estado liberal más allá de los dictados de la doctrina parte claramente de una orientación metodológica propia, pues Giannini desde sus primeros escritos se esforzó en poner en evidencia la historicidad de las soluciones jurídicas, que no pueden concebirse en abstracto sino en la concreta realidad factual⁹. Por ello Paolo Grossi¹⁰ pudo afirmar de Giannini:

antiformalismo e historicismo lo llevaron a ser un personaje en permanente búsqueda, y tiene razón Sabino Cassese, su devoto discípulo, al emparejarlo a otro

⁶ Massimo Severo Giannini, *Corso di diritto amministrativo, Dispense, Anno accademico 1964-65*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 53: "Altra ragione per cui il passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse restò inavvertito fu l'insufficienza dello strumentario teoretico: la nozione di costituzione materiale è introdotta più tardi nella scienza giuridica". Por ejemplo, habrá que esperar hasta 1940 para tener la conocida teoría de Mortati.

⁷ B. Settis, *Le considerazioni sullo Stato moderno...*, cit., p. 694.

Posteriormente, M.S. Giannini, *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 51-52, reflexionará también sobre el calificativo de este Estado liberal como Estado de derecho: "Non più agente ad arbitrio, ma secondo legge. Il fatto che la legge la facesse lui stesso sfuggiva all'attenzione di questi giuristi. Così come sfuggiva loro che lo Stato era lo Stato dominato dalla sola classe borghese, e sfuggiva loro che pur costretta nei limiti della legge l'attività dello Stato aveva troppe volte per moventi gli interessi di gruppi o di persone della classe dominante. Così come infine sfuggiva loro che i cittadini senza diritti politici erano la maggioranza, in ogni Stato, onde questo riposava su un'ingiustizia di base".

⁸ B. Settis, *Le considerazioni sullo Stato moderno...*, cit., p. 695.

⁹ G. Ferasin, *Massimo Severo Giannini...*, cit., pp. 17-18.

¹⁰ P. Grossi, *Scienza giuridica italiana, un profilo storico 1860-1950*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 228, véanse también las páginas 299-302.

gran “inquieto investigador”, el mercantilista Tullio Ascarelli. “Investigador”, un investigador insatisfecho, y por tanto dedicado a profanar mitos, cansado de lugares comunes, de axiomas indiscutibles, que con frecuencia ayudan a salvaguardar la pereza y el misoneísmo de los juristas.

Esta actitud le permitió comprobar que en el Estado liberal todo el poder político estaba en manos de una pequeña clase censitaria¹¹ – es decir, la formada por propietarios agrícolas, empresarios industriales y comerciales, profesionales liberales¹² – la única con representación parlamentaria; y que de esta naturaleza monoclase del parlamento – en un tipo constitucional, recordémoslo, que todo lo confiaba a la ley del parlamento – se derivaba una consecuencia para el ordenamiento jurídico: que los enunciados constitucionales no se correspondían – para la gran mayoría de los ciudadanos – con una realidad jurídica efectiva¹³. Un Estado que reconocía el principio de igualdad pero que atribuía los derechos políticos solo a los ciudadanos que pagaban un mínimo de impuestos directos, que se fundaba así en dos opuestos principios: el de igualdad jurídico-formal y de desigualdad política¹⁴.

Aunque todavía en esta lección no utilizó la terminología del Estado monoclase frente al Estado pluriclase, podemos decir que la construcción conceptual ya estaba madura. Después, diez años más tarde, en el *Corso di diritto amministrativo*¹⁵, aparecieron estas locuciones¹⁶, antes que nada como términos sociológicos¹⁷; que hoy pueden decirse de uso general¹⁸.

¹¹ B. Settis, *Le considerazioni sullo Stato moderno...*, cit., pp. 697-698.

¹² M.S. Giannini, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 106.

¹³ B. Settis, *Le considerazioni sullo Stato moderno*, cit., p. 701.

¹⁴ M.S. Giannini, *Corso di diritto amministrativo*, cit., p. 38.

¹⁵ M.S. Giannini, *Corso di diritto amministrativo*, cit.

¹⁶ En este sentido, G. Ferrara, *Lo Stato pluriclasse: un protagonista del secolo breve*, en S. Cassese, G. Guarino (ed.), *Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione*, edición de, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 73-100, en concreto p. 74.

Como ha explicado Ferasin, Massimo Severo Giannini, cit., p. 42, nota 82, la distinción entre Estado monoclase y pluriclase fue retomada en *Diritto amministrativo* (1970), después la desarrolló en relación a los efectos sobre la organización de los poderes públicos en el ensayo *I pubblici poteri negli Stati pluriclasse* (1979) y finalmente fue enriquecida en *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche* (1986).

Para un análisis de la evolución terminológica véase: S. Cassese, *Lo Stato pluriclasse in Massimo Severo Giannini*, en S. Cassese, G. Carcaterra, M. D’Alberti e A. Bixio (ed), *L’unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 11-50.

¹⁷ M.S. Giannini, *Corso di diritto amministrativo*, cit., p. 50: “da uno Stato monoclasse si passò ad uno Stato pluriclasse, per esprimerci in termini sociologici”. Es decir, un Estado monoclase, o censitario, o burgués desde el punto de vista sociológico; un Estado liberal desde el punto de vista político y jurídico.

¹⁸ Véase, por ejemplo, R. Bin, G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 43, donde aparece como una terminología asumida.

Para caracterizar este Estado liberal, que tiene una base social reducida – en síntesis, la de los propietarios –, lo que le dotaba de una gran homogeneidad socio-cultural compartida entre los representantes políticos (parlamentarios) y la aristocracia burguesa, y le permitía manifestar sus valores en la legislación – en esencia la tutela de la propiedad individual y la tutela de la libertad de empresa y de contratación –, Giannini se centró en el estudio del sufragio electoral en la Italia liberal. Se sirvió para ello – en esta lección – de una obra de Guido Porzio¹⁹, con la que analizó las elecciones y el electorado del Piamonte durante los sucesos de 1848-49; para después reflexionar sobre los datos aportados por las estadísticas electorales del periodo 1859-1880.

Pudo así concluir con la verdadera crisis del Estado monoclasa, que se produce cuando el electorado se amplía, primero rebajando las condiciones económicas, luego con la admisión de los que saben leer y escribir, dejando entrar así en el poder político a otras clases (clases no propietarias). Y comienza a construirse así un nuevo Estado, caracterizado por la inclusión de más de una clase, por la división del poder político entre varias clases. Lo que sucedió en Italia a partir de 1882.

Un nuevo Estado que ya no podía tener cabida en las constituciones unilaterales propias del Estado liberal, que reclamaba un nuevo tipo de constitución pactada, es decir el tipo que fundó Weimar, que triunfa en la última posguerra mundial y que hemos llamado con Fioravanti constitución democrática (la propia del Estado constitucional).

Si en esta *Giornata*, de comparación entre la experiencia italiana y española, miramos la realidad histórica de la península ibérica y recorreremos las leyes y normas electorales de la España liberal²⁰, podemos llegar sin dudar a unas conclusiones similares a las que expuso Giannini.

En España, el sufragio censitario se instauró en 1834²¹ y, salvo el sexenio democrático, estuvo vigente hasta 1890²². En efecto, las disposiciones de 1834 redujeron el cuerpo electoral a poco más de 17.000 personas, sobre un censo de

¹⁹ G. Porzio, *La pseudo rivoluzione piemontese del 1848-49 divenuta poi italiana dopo il 1859, 1860-61, 1870*, in "Fatti e teorie: quaderni di scienze storiche e sociali diretti da Luigi Dal Pane", IV-VIII, 1848, pp. 1-160.

²⁰ Para lo que me remito a M.Á. Presno Linera, *Leyes y normas electorales en la historia constitucional española*, Madrid, Iustel, 2013.

²¹ R. Flaquer Montequi, *Ciudadanía civil y ciudadanía política en el siglo XIX. El sufragio*, en Manuel Pérez Ledesma (dir.), *De súbditos a ciudadanos: una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 59-102, especialmente 74 ss.

Véase también, J. Varela Suances-Carpegna, *Propiedad y sufragio en el constitucionalismo español (1808-1845)*, en Id., *Propiedad e historia del derecho*, Madrid, Centro de Estudios Registrales, 2005, pp. 49-72.

²² R. Flaquer, *Ciudadanía...*, cit. En las páginas 96-98 el autor ofrece un elaboradísimo cuadro sobre las elecciones en España entre 1810 y 1890 en el que informa de los siguientes datos:

población de más de 12 millones, lo que suponía un 0,15 por ciento de la población. Y en 1836, el censo ascendió a 65.000 personas, el 0,5% de la población.

La ley electoral de 1837 al definir las calidades necesarias para ser elector (capítulo II) determinaba:

Artículo 7.º Tendrán derecho a votar en la elección de Diputados a Cortes de cada provincia todo español de veinticinco años cumplidos y domiciliado en ella, que se halle al tiempo de hacer o rectificar las listas electorales, y un año antes, en uno de los cuatro casos siguientes:

1.º Pagar anualmente 200 reales vellón por lo menos de contribuciones directas, incluidas las de cuota fija.

Debe considerarse comprendido en este caso todo individuo que por la escritura registrada de una Sociedad colectiva de industria o comercio justifique que, por el capital o la industria que tiene puesta en ella, paga una contribución que no baja de 200 reales al año.

Sólo servirán para probar el pago de los 200 reales expresados los recibos de los recaudadores o los documentos justificativos de las oficinas donde existan los repartos de las contribuciones.

2.º Tener una renta líquida anual que no baje de 1.500 reales vellón, procedente de predios propios, rústicos o urbanos, o de ganados de cualquiera especie, o de establecimientos de caza y pesca o de cualquiera profesión para cuyo ejercicio exijan las leyes exámenes y exámenes preliminares.

Los profesores probarán su renta con certificados de los Ayuntamientos de los pueblos donde residan, y los propietarios con las escrituras de arriendo u otros contratos de la misma especie, cuando los haya, y si no los hay, con los justiprecios de peritos nombrados por los Ayuntamientos en cuya jurisdicción estén situadas los bienes.

Los labradores que posean una yunta propia destinada exclusivamente a cultivar las tierras de su propiedad están comprendidos en este caso, sin necesidad de justificar su renta.

3.º Pagar en calidad de arrendatario o aparcero una cantidad en dinero o frutos que no baje de 33 reales vellón al año, bien sea por las tierras que cultive o aproveche, incluso los edificios y artefactos destinados al beneficio de las mismas y sus productos, bien sea por los ganados de cualquiera especie o por los establecimientos de caza o pesca que beneficie.

Los labradores que tengan dos yuntas propias destinadas exclusivamente a labrar sus propias tierras, o las que cultiven de propiedad ajena en arriendo o aparcería, serán comprendidos en este caso sin necesidad de probar el arrendamiento que pagan.

4.º Habitar una casa o cuarto, destinado exclusivamente para sí y su familia, que valga al menos 2.500 reales vellón de alquiler anual en Madrid, 1.500 reales vellón

fecha de la elección, normativa aplicada, censo de población, censo electoral, porcentaje sobre la población, diputado por habitante, sufragio, circunscripción, sistema electoral.

en los demás pueblos que pasen de 500 almas, 1.000 reales vellón en los que excedan de 20.000 almas y 400 reales en los demás de la Nación.

Para los efectos de este artículo podrán acumularse la renta procedente de bienes propios y lo que se pague de arrendamiento por los que se cultiven de propiedad ajena, computando el precio del arrendamiento como equivalente a la mitad de una renta de igual valor, de manera que deberá ser inscrito en la lista electoral el que justifique tener 500 reales vellón de renta propia y pagar 2.000 de arrendamiento, y así en los demás casos.

Esta ley se aplicó en siete ocasiones entre 1837 y 1844. Gracias a la desamortización – que dio paso a nuevos propietarios – el censo fue ampliándose y pasó así del 2,2% en 1837 al 5,2%.

Después, la ley de 1846, que estuvo vigente hasta 1864 y reguló ocho procesos electorales, dispuso en su título tercero dedicado a las cualidades necesarias para ser elector:

Artículo 14. Tendrá derecho a ser incluido en las listas de electores para Diputado a Cortes en el distrito electoral donde estuviere domiciliado, todo español que haya cumplido veinticinco años de edad, y que al tiempo de hacer o rectificar dichas listas y un año antes esté pagando 400 reales de contribución directa. Este pago se acreditará con el recibo o recibos del último año.

[...]

Artículo 16. También tendrán derecho a ser incluidos en las listas, con tal que paguen la mitad de la contribución señalada en el Artículo 14, y tengan las demás cualidades que en el mismo se requieren:

- 1.º Los individuos de las Academias Española, de la Historia y de San Fernando.
- 2.º Los Doctores y Licenciados.
- 3.º Los individuos de Cabildos eclesiásticos y los Curas párrocos.
- 4.º Los Magistrados, Jueces de primera instancia y Promotores fiscales.
- 5.º Los empleados activos, cesantes y jubilados cuyo sueldo llegue a 8.000 reales vellón anuales.
- 6.º Los oficiales retirados del Ejército y Armada desde capitán inclusive arriba.
- 7.º Los abogados con un año de estudio abierto.
- 8.º Los médicos, cirujanos y farmacéuticos con un año de ejercicio.
- 9.º Los arquitectos, pintores y escultores con título de Académicos de alguna, de las de nobles artes.
10. Los profesores y maestros de cualquier instituto de enseñanza, costeados de fondos públicos.

Se ha calculado que el censo electoral correspondía al 0,8% de la población²³.

La ley de 1865 supuso una ampliación del censo, este pasó a ser el 2,6% de la población.

²³ Siempre según los datos de R. Flaquer, *Ciudadanía...*, cit., p. 97.

Tras el sexenio democrático, la ley de 1878 volvió a imponer el sufragio restringido siendo el censo del 5,7% de la población.

Finalmente, la ley de 1890 estableció en su artículo primero: “son electores para Diputados a Cortes todos los españoles varones, mayores de 25 años, que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un municipio en el que cuenten dos años al menos de residencia”. De esta forma el censo se amplió significativamente hasta el 27% de la población. Esta ampliación se mantuvo en la ley de 1907.

Sin embargo, en la práctica para hablar con propiedad de sufragio universal habrá que esperar hasta 1931, no solo debido a las prácticas caciquiles imperantes, sino porque hasta esa fecha no se contempló el voto femenino.

También en ese año aparece la Constitución de la Segunda República, una constitución pactada, que Giannini vinculaba al Estado pluriclase.

¿Se han comprendido bien estos cambios tipológicos por la doctrina española? No me refiero a que lo hayan comprendido algunos especialistas dedicados a la historia constitucional²⁴. Me importa más ahora la difusión de esta doctrina y en concreto cómo se enseña en las facultades de derecho²⁵. Para responder a ello voy a basarme en una experiencia que considero significativa, que ocurrió precisamente en mi Universidad.

Hace 25 años, en 1993, en el marco de la celebración de los 15 años de la Constitución española, siendo rector uno de los padres de la Constitución – Gregorio Peces-Barba –, se concedió por la Universidad Carlos III de Madrid el doctorado honoris causa a un grupo de juristas que con su magisterio habían influido claramente en la cultura jurídica de la transición española.

El marco del evento no es marginal. La Carlos III se mostraba como una Universidad fruto de la transición democrática – modelo de la ley de 1983 –, que ponía en el centro de sus enseñanzas jurídicas a la Constitución²⁶.

Dos intervenciones de ese evento me llamaron poderosamente la atención. Desde la “bancada” del derecho privado, el catedrático de derecho civil, Luis Díez-Picazo, uno de los mejores civilistas que ha tenido España, expuso en su intervención que había “que recuperar del respeto por la ley como primera de las

²⁴ Comprensión que se aprecia en B. Clavero, “Presentación”, en N. Matteucci, *Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno*, Madrid, Trotta, 1998, pp. 9-21.

²⁵ Sobre ello reflexionó B. Clavero, *Reflexión sobre la docencia del derecho en España*, en “Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija”, n. 12, 2009, pp. 203-216. Puede interesar también, M. Martínez Neira, *Sobre la nueva enseñanza del derecho. ¿Qué hacemos con el Estado constitucional?*, en “Circunstancia. Revista de ciencias sociales del Instituto universitario de investigación Ortega y Gasset”, n. 23, 2010.

²⁶ Véase, A. Mora Cañada, Carolina Rodríguez López (eds.), *Hacia un modelo universitario. La Universidad Carlos III de Madrid*, Madrid, Dykinson, 2004.

fuentes y predicar un nuevo jacobinismo"²⁷. Añadió además – estas palabras no aparecen en el texto impreso – que a los alumnos había que enseñarles a arrodillarse ante la ley. Comenté este suceso rápidamente con el Prof. Fioravanti, quien coincidió en apreciar la influencia del modelo liberal decimonónico.

La segunda intervención es distinta, no se refiere al inteligente discurso de Eduardo García de Enterría²⁸, sino a la presentación que de él hizo el catedrático Luciano Parejo, en la que se preguntaba: ¿qué tiene que ver el derecho administrativo, un derecho ligado a la práctica burocrática, con la Constitución? El plantear esa cuestión, entiendo que como pregunta retórica y llena de ironía, indica mucho de lo que Parejo veía al otro lado del estrado, es decir en la doctrina jurídica compartida por los presentes en el acto.

Esa era una de las preguntas que se hicieron los primeros cultivadores del derecho administrativo, en plena época liberal, para concluir que constitución y administración pública eran dos mundos separados.

En definitiva, en uno y otro caso, se trataba del protagonismo que el proyecto liberal había concedido al Estado en lugar de la constitución y que en pleno siglo XIX se manifestó en dos direcciones fundamentales: el código civil y la administración pública²⁹.

Es cierto que desde que tuvo lugar ese acto ha llovido mucho, que en los 25 años transcurridos desde entonces las cosas han ido cambiando, y que la doctrina constitucional ha vivido un sano desarrollo. Sin embargo, ¿se ha comprendido bien la naturaleza del Estado constitucional y así las peculiaridades de las Constituciones que nos convocan en este acto? ¿Se ha respetado en la práctica política y jurídica el núcleo fundamental que las caracterizaban?

Cuando en el horizonte político del 2017 contemplamos la crisis de la social democracia (y de la democracia cristiana), es decir, precisamente del proyecto político (y del compromiso) que está en la base del contrato o pacto que caracterizó (¿podemos seguir utilizando el tiempo presente?) la sociedad de la posguerra y su constitución, tal vez no sea ocioso recordar – a modo de conclusión – estas palabras de Fioravanti³⁰:

²⁷ Véase, *Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Profesor Doctor Luis Díez-Picazo y Ponce de León*, <http://hdl.handle.net/10016/8630>.

²⁸ Véase, *Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Profesor Doctor Eduardo García de Enterría*, <http://hdl.handle.net/10016/8633>.

²⁹ M. Fioravanti, *Los derechos fundamentales...*, cit., p. 102 ss.

³⁰ M. Fioravanti, *Constitución. De la Antigüedad a nuestros días*, III ed., Madrid, Trotta, 2011, p. 164. En esta ocasión, el autor se refiere al equilibrio entre gobierno limitado y tareas de gobierno, es decir, entre justicia y gobierno político, siempre referidos a la inviolabilidad de los derechos. Pero ese mismo equilibrio lo podemos aplicar a cualquiera de los otros componentes del núcleo constitucional, es decir, al principio de igualdad y al principio democrático.

Si ese equilibrio se rompiera, con él caería también el tipo histórico de constitución que se ha afirmado en la segunda mitad del siglo XX. El nuevo siglo buscaría entonces una nueva forma constitucional, como otras muchas veces ha sucedido a lo largo de la historia.